



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

DEMANDANTE:	Orlando García Garzón
DEMANDADA:	Colpensiones, Protección y Porvenir S.A.
TIPO DE PROCESO	Ordinario Laboral
DECISIÓN:	Revoca, confirma y adiciona
Radicado	05001-31-05-021-2021-00547-01 (024) 05001310502120210054701

Medellín, a los dieciséis (16) días de junio de dos mil veintitrés (2023).

La **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por las Magistradas **Luz Amparo Gómez Aristizábal**, **María Eugenia Gómez Velásquez**, y **Claudia Angélica Martínez Castillo**, quien actúa como ponente, se reunió para resolver el grado jurisdiccional de consulta que se surte en favor de Colpensiones, en el proceso ordinario laboral adelantado por el señor **Orlando García Garzón** en contra de **Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A.** frente a la decisión adoptada por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín.

Una vez agotado el procedimiento previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la Sala profiere, por escrito, la siguiente:

SENTENCIA EN SEGUNDA INSTANCIA.

I. ANTECEDENTES:

1.1 PRETENSIONES.

El señor **Orlando García Garzón** presentó demanda en contra de Colpensiones, Porvenir S.A. y Protección S.A. buscando se declare la ineficacia del traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (en adelante RAIS), disponiendo la reactivación automática de su vinculación al Régimen de Prima Media (en adelante

RPM) sin solución de continuidad; que se condene a Porvenir S.A. y a Protección S.A. a trasladar a Colpensiones todos los aportes, rendimiento y cuotas de administración de su cuenta de ahorro individual, bono pensional; la indexación y las costas del proceso.

1.2 HECHOS.

Fundamentó sus pretensiones en que nació el 5 de diciembre de 1961 y tiene 59 años de edad; que se afilió al ISS el 18 de octubre de 1988; que se trasladó al RAIS administrado por Horizonte SA hoy Porvenir S.A. el 30 de enero de 1998; sin embargo, aduce que la entidad no le brindó la debida información acerca de las implicaciones de su traslado.

1.3 CONTESTACIÓN DEMANDADAS.

Admitida la demanda e integrada la litis, las demandadas allegaron respuesta oportuna, así:

Colpensiones aceptó la fecha de nacimiento y edad del actor, su afiliación al ISS y las semanas cotizadas al traslado; de los demás hechos, dijo que no le constan por ser situaciones ajenas a la entidad; que no consta de los hechos de la afiliación al RAIS, la solicitud de documentos elevada ante Porvenir y la respuesta emitida, la simulación de la mesada pensional para el RAIS y la negación del traslado de régimen hecha por Porvenir y por ellos; negando los hechos relacionados a indebida información de las AFP al momento de su traslado; oponiéndose a las pretensiones dirigidas en su contra y proponiendo las excepciones de carga dinámica de la prueba – particularidades del caso, imposibilidad de retornar al *statu quo ante* por múltiples afectaciones al sistema general de pensiones, imposibilidad por ser tercero de buena fe, improcedencia para decretar la ineficacia del traslado de régimen o inexistencia de la obligación, inexistencia de vicio en el consentimiento, improcedencia de intereses moratorios, falta de legitimación en la causa por pasiva, inexistencia del derecho de afiliación al régimen de prima media con prestación definida administrado por Colpensiones, falta de causa para demandar, falta de interés en su vida pensional, buena fe de Colpensiones, mala fe/temeridad, devolución de cuotas de administración – seguros previsionales – comisiones indexados, imposibilidad de condena en costas, prescripción y

compensación, proceso de ineficacia con pensión reconocida, intereses moratorios cuando requisitos de la prestación no se probaron en sede administrativa.

Porvenir S.A. señaló que no consta de los hechos personales del actor ni los hechos relacionados a la afiliación al RPM ni a Protección SA; negó los hechos que hablan de una indebida información y los relativos a la mesada pensional simulada con el RPM. Se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló las excepciones de: prescripción, de la prescripción de la acción de nulidad, cobro de lo no debido por ausencia de causa e inexistencia de la obligación y buena fe.

Protección S.A. aceptó la fecha de nacimiento y edad del actor, que no consta de los hechos relativos a su afiliación y trámites en el RPM ni en el RAIS con fondos distintos a ellos por ser hechos de terceros, y negó los hechos relativos a la debida información suministrada por ellos al momento de su afiliación; se opuso a las pretensiones de la demanda y formuló como excepciones de mérito las de inexistencia de la obligación, buena fe, prescripción, traslado de aportes a la AFP PORVENIR S.A.. Validez y eficacia del traslado entre administradoras de fondos de pensiones del RAIS, traslado y movilidad dentro del RAIS a través de diferentes AFPs convalida la voluntad de estar afiliado a dicho régimen, aprovechamiento indebido de los recursos públicos del sistema general de pensiones; reconocimiento de restitución mutua en favor de la AFP: inexistencia de la obligación de devolver la comisión de administración cuando se declarara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa, y la de inexistencia de la obligación de devolver la prima del seguro previsional cuando se declara la nulidad y/o ineficacia de la afiliación por falta de causa y porque afecta derechos de terceros de buena fe.

1.4 SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA:

El Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, mediante sentencia del 1 de febrero de 2023, dispuso:

1. Declarar la ineficacia del traslado del (de la) demandante ORLANDO GARCÍA GARZÓN del RPMPD al RAIS, y declarar la afiliación sin solución de continuidad en el RPMPD.
2. Ordenar a PORVENIR el traslado a COLPENSIONES, y a esta a recibir los saldos de la cuenta de ahorro individual del (de la) demandante, incluidos los rendimientos financieros y los saldos del Fondo de Garantía de Pensión Mínima.

3. Se condena a PORVENIR S.A. a trasladar ante COLPENSIONES las cuotas de administración, y las sumas del seguro previsional, descontadas de los aportes realizados en favor del demandante, durante todo el tiempo que este estuvo afiliado en el RAIS, incluyendo los tiempos de afiliación con otras AFP.
4. Se declara probada la excepción de ausencia de prueba del vicio en el consentimiento y no probadas las demás.
5. CONDENAR en costas a PORVENIR S.A. en favor del (de la) DEMANDANTE. Agencias en derecho: 1 smlmv.
6. Se ordenará el grado de CONSULTA en favor de COLPENSIONES en caso de no apelación por su apoderado.

El apoderado de Porvenir solicitó corrección del acta de audiencia, con fundamento en que se omitió señalar la solicitud de aclaración del numeral tercero por él presentada en forma verbal en la audiencia de juzgamiento y la aclaración dictada por el Juez oralmente (archivo 17SolicitudAclaraciónPorvenir). Por auto calendado febrero 6 de 2023 el juez negó la aclaración señalando que:

La tesis planteada en la sentencia sostiene que el fondo de pensiones que debe asumir el reembolso de las cuotas de administración y del seguro previsional es solamente la entidad que dio lugar a la desvinculación del régimen de prima media con prestación definida, incluyendo aquellos tiempos en que el afiliado estuvo vinculado con otras administradoras del RAIS. Planteamiento que se ve reflejado en la parte resolutive, numeral 3, toda vez que de acuerdo con las pruebas allegadas el demandante se vinculó por primera vez al RAIS con la AFP PORVENIR a partir del 1-JULIO-1994, como se puede constatar en el certificado de ASOFONDOS aportado por PORVENIR y que obra en el fl. 27, doc07 correspondiente a los anexos aportados por esta AFP." (archivo 18NoAccedeAclaración).

II. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

Porvenir esgrime como argumentos la negativa del juez a la solicitud de corrección de la sentencia, en razón de que en la grabación de la audiencia puede determinarse de forma precisa y concisa, que la aclaración del Juez estuvo orientada a manifestar que la devolución de los conceptos antes mencionados solo comprendía los periodos de afiliación con Porvenir, teniendo en cuenta que el actor también estuvo afiliado con la AFP ING, hoy Protección del 01 de agosto de 2002 al 31 de mayo de 2006. Que en razón de la orden impartida no tiene el fondo injerencia en los descuentos que realizaron otras AFPs sobre los aportes del demandante, dando así que sea improcedente ordenar a mi representada el trasladar todos los descuentos que se realizaron por otros fondos, pues se desconoce cómo se hubieren hecho los mismos, sobre qué valor, entre otras circunstancias que no fueron aclaradas en sus consideraciones y sentencia.

Demandante el apoderado solicitó la confirmación de la sentencia de primera instancia ante la ineficacia de su traslado al RAIS por falta de consentimiento informado,

cumpléndose los elementos fácticos, jurídicos y jurisprudenciales. Que Porvenir S.A. y Protección S.A. deben devolver a Colpensiones los valores indexados cobrados a título de cuotas de administración, comisiones, sumas adicionales de seguros y los aportes para garantía de pensión mínima.

III. CONSIDERACIONES DE LA SALA

3.1 PRESUPUESTOS PROCESALES Y ALCANCE DEL RECURSO

Conoce la Sala del grado de consulta de la sentencia a favor de Colpensiones de conformidad con lo señalado en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, en concordancia con lo dispuesto por la H. Corte Constitucional en la Sentencia C-424 de 2015.

3.2 PROBLEMA JURÍDICO

Esta Sala analizará, si se declara la ineficacia del traslado del demandante Octavio de Jesús Manco Rodríguez, con el consecuente regreso al RPM administrado por Colpensiones, y, si es así, establecerá sus consecuencias.

3.3 HECHOS RELEVANTES PROBADOS

De acuerdo con el acervo probatorio arrimado, no hay duda que el demandante nació el 10 de enero de 1973 como se acredita con el registro civil de nacimiento (folio 22 archivo 02Demanda), y se afilió al RPM hoy administrado por Colpensiones, el 18 de octubre de 1988, como se infiere de la historia laboral expedida por Colpensiones (folios 68 a 72 archivo 05ContestaciónColpensiones); posteriormente se trasladó al RAIS administrado por Porvenir S.A. suscribiendo solicitud de vinculación el 21 de junio de 1994 (folio 31 archivo 07Contestación Porvenir), y dentro del RAIS migró al fondo Colpatria SA hoy Protección S.A. con la suscripción del formulario el 31 de mayo de 1996, seguidamente a Horizonte S.A. hoy Porvenir S.A. mediante suscripción de formulario el 7 de junio de 1996, a Colmena AIG hoy Protección S.A. el 26 de marzo de 1999 (fl. 35 archivo 08Contestación Protección S.A.) y finalmente retornó a Porvenir S.A. el 7 de abril de 2006 (fl. 32 archivo 07Contestación Porvenir).

3.4 INEFICACIA DEL TRASLADO DE RÉGIMEN PENSIONAL.

El primer aspecto es recordar que, según el literal b) del artículo 13 de la Ley 100 de 1993, la selección de cualquiera de los regímenes previstos en el literal a) de esa disposición es libre y voluntaria, de manera que, cuando un empleador o cualquier persona natural o jurídica, desconozca ese derecho, sea acreedor a las sanciones del inciso 1° del artículo 271 de la misma ley, de acuerdo con ella, cualquier persona que atente contra el derecho del trabajador a su afiliación, traerá como consecuencia que la afiliación quedará sin efecto.

Lo segundo es que, aunque la afiliación es libre y voluntaria, las administradoras de pensiones están compelidas a cumplir con el deber de información, de modo que la decisión de traslado esté precedida del cumplimiento de ese mandato.

Ahora, según el artículo 97, numeral 1.o del Decreto 663 de 1993, las administradoras de fondos de pensiones deben suministrar información necesaria y transparente a los afiliados, «de suerte que les permita, mediante elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y tomar decisiones informadas».

Por información necesaria, la Sala de Casación Laboral ha afirmado que comprende:

(...)la descripción de las características, condiciones, acceso y servicios de cada uno de los regímenes pensionales, de modo que el afiliado pueda conocer con exactitud la lógica de los sistemas públicos y privados de pensiones», y respecto a la transparencia, ha explicado que implica la obligación de dar a conocer al usuario, en un lenguaje claro, simple y comprensible, «los elementos definitorios y condiciones del régimen de ahorro individual con solidaridad y del de prima media con prestación definida, de manera que la elección pueda realizarse por el afiliado después de comprender a plenitud las reglas, consecuencias y riesgos de cada uno de los oferentes de servicios» (CSJ SL1452-2019, reiterada en SL1688-2019 y SL1689-2019).

El fondo de pensiones es responsable de proporcionar e indicar al usuario que pretende trasladarse de régimen, los elementos determinantes para tomar una decisión informada. En ese orden, el traslado no surte efectos cuando se le oculta información o no se le brinda en forma completa, porque en ese caso no existe una decisión verdaderamente libre y voluntaria, ya que la determinación de trasladarse de régimen pensional puede variar según la información que se brinde (sentencias CSJ SL373-2021 MP Clara Cecilia Dueñas Quevedo; CSJ SL12136-2014 MP Elsy del Pilar Cuello Calderón y CSJ SL17595-2017 sentencia de instancia)

Por lo tanto, no es posible evidenciar un verdadero consentimiento informado en quien carece de los elementos suficientes para adoptar una decisión adecuada a sus circunstancias particulares, de manera que es insuficiente afirmar que el afiliado expresó su voluntad al permanecer en el RAIS y que su vinculación conserva validez, cuando las administradoras incumplieron la obligación de brindarle la información necesaria al momento de su afiliación, en obediencia a lo establecido en los artículos 2 y 12 del Decreto 663 de 1993; aun cuando la migración se haya dado en el mismo régimen pensional, como en el caso bajo estudio ante la multifiliación del demandante en el RAIS.

Así, cuando el afiliado alega la falta de información o la mala entrega de esta por parte de la AFP, como ocurre en este caso, la administradora tiene sobre sí la carga de demostrar el cumplimiento de esa obligación, por cuanto: *«la prueba de la diligencia o cuidado incumbe al que ha debido emplearlo»* (artículo 1604 CC).

De tal manera que, al haberse indicado por el actor que *«no recibió la información»*, por tratarse de una negación indefinida, lo releva de probar ese hecho y a su vez, traslada la carga de la prueba en el demandado, quien deberá probar en contrario, es decir, que sí proporcionó la información completa y suficiente, en las etapas preparatorias y previas al traslado.

Así, se reitera que la carga de la prueba, sin importar la circunstancia particular del afiliado, está a cargo de las AFP, toda vez que: (i) la afirmación de no haber recibido información corresponde a un supuesto negativo indefinido que solo puede desvirtuar el fondo de pensiones mediante la prueba que acredite que cumplió esta obligación; (ii) la documentación soporte del traslado debe conservarse en los archivos del fondo, dado que es esta entidad la que está obligada a observar la obligación de brindar información y, más aún, probar ante las autoridades administrativas y judiciales su pleno cumplimiento, y (iii) no es razonable invertir la carga de la prueba en contra de la otra parte de la relación contractual, ya que las entidades financieras por su posición en el mercado, profesionalismo, experticia y control de la operación, tienen una clara preeminencia respecto al afiliado lego (CSJ SL1452-2019, SL1688-2019, SL1689-2019 y SL4426-2019).

En ese orden, la constatación de que se cumplió con el deber de información es ineludible, por lo que la simple firma del formulario de afiliación es insuficiente para

acreditar el consentimiento informado del afiliado. Este es el criterio postulado por la CSJ en su Sala Laboral, en la sentencia SL19447-2017:

el acto de afiliación o traslado de régimen pensional debe estar acompañado de la decisión libre y voluntaria del afiliado, la cual no se limita a la simple manifestación de quien decide trasladarse, sino que debe ajustarse a los parámetros de libertad informada, es decir, la solicitud y trámite de traslado de régimen pensional, debe estar precedida de una información clara, comprensible y suficiente, sobre las consecuencias favorables y desfavorables que su decisión acarrea» (CSJ SL7561-2021, CSJ SL5595-2021, CSJ3719-2021),

Ahora, el hecho de que el afiliado hubiese suscrito el formulario de vinculación o que en el mismo se empleen leyendas o afirmaciones tales como que «la afiliación se hace libre y voluntaria», «se ha efectuado libre, espontánea y sin presiones» u otras similares que suelen consignarse en los formatos preimpresos, no liberan a las AFP de su obligación de cumplir de manera rigurosa y de buena fe su deber de información. A lo sumo, estas expresiones sirven para acreditar un consentimiento sin vicios, pero no uno debidamente informado (CSJ SL, 9 sep. 2008, rad. 31314, SL, 22 nov. 2011, rad. 33083, SL4964-2018, SL12136-2014, SL19447-2017, SL4964-2018, SL1421-2019 y SL2877-2020).

Se insiste, que las AFP cumplan el deber de información y su acreditación en el proceso no se puede demostrar con las simples manifestaciones genéricas del afiliado de aceptar las condiciones del traslado, pues ellas son insuficientes ya que quien debía probar la diligencia y cuidado era quien estaba obligado a emplearla, en este caso la administradora del fondo pensional (CSJ SL4964-2018).

En ese orden de ideas, al presentarse el traslado de la carga de la prueba del afiliado a las Administradoras de Fondos de Pensiones, por ser estas las que cuentan con los medios técnicos y los conocimientos respecto a los servicios que ofrecen, era tanto Porvenir S.A. como Protección S.A., quienes debían probar en el proceso que brindaron una asesoría personalizada y completa al demandante al momento de su traslado, analizando las circunstancias particulares de su caso.

Y, es que las AFP desde su creación, tienen el deber, de suministrar información objetiva, comparada y transparente sobre las características, ventajas y desventajas de cada uno de los regímenes pensionales, así como de las consecuencias jurídicas del traslado, como de ello da cuenta el artículo 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, en armonía con el artículo 13, literal b) de la Ley 100 de 1993 (CSJ: SL1452-2019,

SL1688-2019, SL1689-2019, SL3464-2019, SL4360-2019, SL2611-2020, SL4806-2020 y SL373-2021).

Deben informar por ejemplo, que existen diferentes modalidades pensionales, que el valor de la pensión de vejez en el RAIS depende del capital consignado en la cuenta de ahorro individual; que si no completa el capital suficiente para obtener por lo menos una pensión mínima -equivalente al 110% del SMLMV a la fecha de expedición de la L.100/93, actualizado con el IPC (Índice de Precios al Consumidor), debe seguir cotizando, si es o no beneficiario del régimen de transición pensional y las ventajas que se derivan del mismo, así como efectuarle las proyecciones aritméticas y los comparativos necesarios hacia el futuro de ambas opciones, con el cálculo aproximado del monto pensional que le correspondería, y en fin, mostrarle al afiliado **con detalle**, las ventajas y desventajas de tomar la decisión de traslado de régimen pensional, para que la misma sea realmente libre y voluntaria.

Y es que debe reiterarse que, la labor del funcionario del fondo privado de pensiones en el momento previo a hacer efectivo el traslado de régimen, debe trascender al “*deber del buen consejo*”, como lo ha señalado la jurisprudencia laboral, en la medida que es responsabilidad de dichas administradoras y de sus promotores, velar por la información suministrada a sus usuarios -art. 10 D.720/94- por el cual se reglamentaron los artículos 105 y parcialmente el 287 de la Ley 100 de 1993.

Ahora, si bien Porvenir S.A. y Protección S.A., afirmaron al contestar la demanda respectivamente que al actor se le brindó la asesoría requerida para el caso (archivo 07ContestaciónPorvenir y archivo 08ContestaciónProtección - carpeta 1), de acuerdo con la jurisprudencia ya descrita, tenían la carga de acreditarlo, sin embargo, ninguna aportó prueba que dé cuenta de la información realmente suministrada al demandante en ese momento, adicional que, como lo viene sosteniendo la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, la oportunidad de **la información se juzga es al momento del acto jurídico del traslado de régimen pensional**, y no con posterioridad a aquel.

Así las cosas, en el caso a estudio considera la Sala que se incumplió uno de los presupuestos para la eficacia del acto de traslado de régimen pensional, esto es, el deber de información, cuya ausencia, dada su incidencia en el derecho pensional, trae como consecuencia la declaración de ineficacia del traslado de régimen pensional, y

con ello, que las cosas vuelvan al estado anterior en el que se encontraban antes de aquella como que el demandante nunca se trasladó al RAIS. Razón por la que en este punto se confirmará la decisión.

3.5 CONSECUENCIAS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DEL TRASLADO.

La declaratoria de ineficacia implica que las cosas vuelven al mismo estado en que se hallarían de no haber existido el cambio, esto es, se priva de todo efecto práctico al traslado *«bajo la ficción jurídica de que aquella nunca se trasladó al RAIS o, más bien, siempre estuvo afiliada al régimen de prima media con prestación definida»* (CSJ SL1689-2017).

Por lo tanto, considera la Sala que al declararse la ineficacia del traslado del demandante del RPM al RAIS, todos aquellos actos jurídicos que se celebraron con posterioridad a la suscripción de dicha afiliación pierden su fuerza vinculante; por lo que es legítimo que cada fondo Porvenir S.A. y Protección S.A. trasladen respectivamente a Colpensiones no solo el saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, sino también, los porcentajes destinados a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados, como ha determinado la jurisprudencia uniforme de nuestro órgano de cierre jurisdiccional desde la sentencia con Rad 31989 del 9 de sept/08, M.P. Eduardo López Villegas, reiterada en las SL 4989 y 4964 del 14 de nov/18, radicados 47.125 y 54.814, respectivamente, M.P. Gerardo Botero Zuluaga, SL 1688 del 8 mayo/19, SL 2877 del 29/07/2020, Rad. 78667, M.P Clara Cecilia Dueñas Quevedo, SL 3034 Rad. 86961 del 07/07/2021; 3571 Rad. 88476 del 04/08/2021; 3708 Rad 88556 del 18/08/2021; 3709 Rad. 88875 y 3710 Rad. 88550 del 18/08/2021; 3769 Rad, 84296 del 11/08/2021, SL755 Rad 90519, SL756 Rad 90548 del 09/03/2022 y SL1019 Rad 87915 del 16/03/2022, M.P Luis Benedicto Herrera Díaz; y SL843 Rad 85499 del 16/03/2022 M.P Gerardo Botero Zuluaga.

Según el grado jurisdiccional de consulta favorable a Colpensiones, la Sala revocará el numeral 3 y 4 de la sentencia objeto de alzada, para en su lugar condenar a **Porvenir S.A.** y a **Protección S.A.** que en el término de 30 días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, trasladar no solo el saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, sino también, los porcentajes destinados a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados; hasta el último período efectivamente cotizado en

cada fondo; así como la historia laboral del afiliado Orlando García Garzón, con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es, entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, especificando cada valor, *“...junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen ...”*.

3.6 PRESCRIPCIÓN

No se llama a prosperar la excepción de prescripción por cuanto la acción sobre el traslado de régimen pensional guarda relación inescindible con los requisitos y valor de la pensión, por lo que se debe predicar la imprescriptibilidad de la acción, ver al respecto Sentencia SL-1421 de 2019, Radicado No. 56174 de 10 de abril de 2019.

En efecto, de manera reiterada y pacífica, la SCL de la Corte ha defendido la tesis de que las acciones judiciales encaminadas a que se compruebe la manera en que ocurrió un hecho o se reconozca un estado jurídico, son imprescriptibles. Lo anterior, bajo la premisa de que ni los hechos ni los estados jurídicos prescriben, a diferencia de lo que ocurre con los derechos de crédito y obligaciones que de ello surjan.

3.7 COSTAS PROCESALES.

Finalmente, y ante la revocatoria parcial de la sentencia de primera instancia y en razón de haberse proferido condena contra Protección S.A., al respecto el artículo 365 del C.G.P indica que se trata de una condena objetiva que opera por el solo hecho de resultar la parte vencida en el proceso o en el recurso; por lo que al haber prosperado las pretensiones de la demanda, declarándose la ineficacia del traslado de régimen, resultando ambas demandadas Porvenir S.A. y Protección S.A. vencidas en el Proceso, sí hay lugar a imponer tal condena no solo a Porvenir S.A., sino a Protección SA, y a favor de la parte activa (Ver al respecto CSJ SCL, Rad 40993 del 22 de enero de 2013, M. P. RIGOBERTO ECHEVERRI BUENO), por lo que se adicionará el numeral quinto de la sentencia.

Conforme con las razones fácticas, probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia revisada consulta se revocará en el numeral 3 y 4, adicionará el numeral 5 y confirmará en todo lo demás.

Sin Costas de segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

IV. RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR los numerales **Tercero y Cuarto** de la sentencia proferida por el Juzgado Veintiuno Laboral del Circuito de Medellín, el 1 de febrero de 2023, dentro del proceso ordinario promovido por ORLANDO GARCÍA GARZÓN contra PORVENIR S.A. y PROTECCIÓN S.A., según las consideraciones de esta sentencia. Y en su lugar:

TERCERO: CONDENAR a Porvenir S.A. que en el término de 30 días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, trasladar no solo el saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, sino también, los porcentajes destinados a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados; hasta el último período efectivamente cotizado en ese fondo; así como la historia laboral del afiliado Orlando García Garzón, con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es, entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada periodo cotizado, especificando cada valor, “...*junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen ...*”.

CUARTO: CONDENAR a Protección S.A. que en el término de 30 días contados a partir de la ejecutoria de la sentencia, trasladar no solo el saldo de la cuenta de ahorro individual con los rendimientos financieros, sino también, los porcentajes destinados a gastos de administración, primas de seguros previsionales y al fondo de garantía de pensión mínima, debidamente indexados; hasta el último período efectivamente cotizado en ese fondo; así como la historia laboral del afiliado Orlando García Garzón, con el suministro de la información prevista en el artículo 2.2.2.4.8 del Decreto 1833 de 2016 -por medio del cual se compilan las normas del Sistema General de Pensiones-, esto es, entregando la historia laboral del afiliado con la información discriminada y detallada por cada

periodo cotizado, especificando cada valor, “...*junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifiquen ...*”.

SEGUNDO: Adicionar el numeral quinto de la sentencia objeto de alzada, en el sentido de condenar en costas de primera instancia a Protección SA, se fijan las agencias en derecho en la suma de \$1.160.000 de pesos, a favor del demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de este proveído.

TERCERO Confirmar en lo demás la sentencia revisada en apelación y consulta.

CUARTO: Sin Costas de segunda instancia.

Lo resuelto se notifica por **EDICTO**.

Las Magistradas,


CLAUDIA ANGÉLICA MARTÍNEZ CASTILLO


LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL


MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ